

ECONOMIA

SIN embargo, ha sido Chile el país que ha comenzado a vivir una experiencia sin precedentes en América Latina, convirtiéndose en un espectacular laboratorio. En pocos meses ha pasado de la «revolución en libertad» de Frei a la «revolución» sin adjetivos de Allende, cuyo intento de iniciar la construcción del socialismo a partir de la actual estructura social del país tiene una importancia trascendental.

La victoria de Allende en las elecciones del 4 de septiembre pasado, de amplio eco en todo el mundo, representó, por una parte, la derrota de la política norteamericana en el continente, y por otra, la confirmación de las tesis que afirmaban la posibilidad de un triunfo electoral de una izquierda radical. Así, estas últimas elecciones chilenas demuestran que «las tendencias progresistas ganan terreno en América Latina» y contradicen «el dogma testarudo según el cual la lucha armada constituye el único camino de la revolución» («Komu-

Tres países andinos —Perú, Bolivia y Chile— siguen siendo actualidad. Los militares peruanos prosiguen su política de profundas reformas que ya han comenzado a deteriorar los intereses de la minoría oligárquica y de las grandes empresas extranjeras radicadas en el país. La amnistía política acordada últimamente, que afecta a miembros destacados de la izquierda —Hugo Blanco, Héctor Béjar, Ricardo Gadea, etc.— dentro del contexto en que se ha producido es una medida orientadora de los futuros acontecimientos; por su parte, el Gobierno de Bolivia, país donde las fuerzas están más dispersas y equilibradas, sin haber tomado aún resueltamente la vía reformista de sus vecinos, también ha liberado a antiguos miembros de la guerrilla de Ernesto Guevara. La puesta en libertad de personajes como Régis Debray y Giro Bustos ha supuesto, evidentemente, un desafío al todavía poderoso sector derechista del Ejército, y posiblemente marque el inicio de otra clase de decisiones radicales, capaces de transformar la sociedad boliviana.

de un marco de respeto a determinadas instituciones heredadas, enfrentándose, lógicamente, a los tradicionales detentadores del poder.

La oligarquía —grandes terratenientes, gran capital, intereses bancarios— y los grupos de presión extranjeros trataron en todo momento de impedir la victoria de Allende mediante una campaña sis-

los votos), fue ratificado por el Congreso, tomando posesión de la Primera Magistratura el 4 de noviembre. (Hay que hacer notar que, en 1963, Arturo Illia fue elegido Presidente de Argentina con sólo un 22 por 100 de los sufragios y que, en 1968, Rafael Caldera lo fue en Venezuela con el 29 por 100 de los votos.)

Aunque se ha afirmado que las

didato cristiano-demócrata derrotado en las pasadas elecciones, considera que su partido ha de aceptar «lealmente» una colaboración paritaria con las fuerzas de izquierda, ya que de no seguir siendo «una fuerza popular en la lucha contra el neocapitalismo, que está arruinando a Chile, y los seudovalores de la sociedad de consumo, nos transformaríamos en una fuerza anti-histórica». También piensa que Allende, sin el apoyo de la Democracia Cristiana, no podrá «llevar a cabo la gran política de cambios institucionales, sociales y económicos que se asignaron» (declaraciones a «La Stampa», 3 noviembre del 70). Es decir, la Democracia Cristiana —o al menos un importante sector de este partido— no parece que va a ser un obstáculo insuperable para la realización del programa de Allende. De hecho —y como se puso de manifiesto al apoyar su candidatura en el Congreso— la Democracia Cristiana está más cerca de los cambios que propone la Unión Popular que del in-

CHILE: ¿UNA NUEVA VIA EN LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO?

nist», Belgrado, 29 octubre 1970). El triunfo de Allende se identificó con las tesis soviéticas y de los Partidos Comunistas «clásicos» que preconizaban la formación de coaliciones progresistas para llegar «legalmente» al poder. En efecto, hace ya tres años, el secretario general del Partido Comunista chileno, Luis Corvalán, condenaba el «aventurerismo» de las guerrillas y se pronunciaba en favor de la tesis legalista. Pero sería erróneo pensar que el éxito de Unidad Popular ha satisfecho únicamente a esta línea. También los dirigentes chinos han considerado positivamente la elección de Allende —no obstante no coincidir con sus teorías sobre la toma de poder— en cuanto que la han juzgado, ante todo, como una vía «chilena». («Haremos los cambios a la manera chilena», subrayan continuamente los actuales dirigentes chilenos.) Tampoco es un secreto para nadie que las más altas personalidades del Gobierno cubano han visto siempre con simpatía la figura de Allende y que su triunfo tuvo especial eco en La Habana. En cualquier caso, es evidente que no es lo mismo ganar una elección que hacer una revolución, máxime cuando el nuevo Gobierno tendrá que moverse dentro

temática de desconfianza, incertidumbre y terror. Los «señores del dinero» acudieron primero a una campaña de terror económico. Hicieron caer verticalmente las cotizaciones en las Bolsas de valores, retiraron en forma masiva los depósitos de los Bancos (del 4 al 14 de septiembre los depósitos bajaron 920 millones de escudos) y ante la fuga de capitales el Gobierno de Frei hubo de tomar energéticas medidas económicas. En otro terreno, las ventas de innumerables artículos de consumo experimentaron fuertes descensos y los pedidos a la industria se redujeron en forma notable. Pero como el «pánico financiero» no diera el resultado esperado, la extrema derecha no dudó en acudir al atentado político en la persona del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se intentó con ello una vieja maniobra: enfrentar el Ejército al nuevo Gobierno. Todo en vano, porque las Fuerzas Armadas mantuvieron una postura antiintervencionista, tradicional en Chile, con lo que el candidato de Unidad Popular —frente integrado por comunistas, socialistas radicales, una facción de la Democracia Cristiana y otras pequeñas agrupaciones—, vencedor por mayoría relativa (36,3 por 100 de

fuerzas antimarxistas sumaron el 63,7 por 100 de los votos, la realidad es que, al final, el programa del candidato demócrata cristiano, Radomiro Tomic (27 por 100 de los votos), era muy similar al de Allende, siéndolo más ahora, después del compromiso de éste de mantener las Instituciones democráticas. La postura de la Democracia Cristiana tiene su explicación en que «ningún Gobierno puede hacer funcionar en Chile el neocapitalismo y las viejas estructuras. Dentro del orden institucional y económico del pasado no hay modo de resolver los problemas del país» (R. Tomic, declaraciones a «La Stampa», 3 de noviembre 1970). Convencido de que el programa de Unidad Popular «es un programa que ofrece al país cambios importantes, pero que no es un programa socialista o comunista» y que «las actuales estructuras institucionales y económicas son inadecuadas», Tomic opina que es «indispensable una nueva institucionalización y una nueva economía para sacar a Chile de su frustración nacional, de la pobreza interna y de una excesiva dependencia económica del extranjero» (R. Tomic, declaraciones en Buenos Aires, 17 diciembre 1970). Sobre esta base, el can-

movilismo conservador de Alessandri.

También, por último, grandes sectores de la Iglesia apoyan, por ahora, la tendencia reformista: «los obispos de Chile pensamos que Cristo no puede bendecir una estructura capitalista que va contra la dignidad de la persona humana y olvida la dimensión social del hombre, haciéndole un ser egoísta, centrado en el dinero y en los bienes materiales» (declaración 28 mayo 1970).

Una descripción del sistema

El actual ministro de Economía, Pedro Vuskovic Bravo —destacado economista al servicio de CEPAL hasta hace unos meses—, ha detallado, recientemente, en un artículo titulado «Hacia la construcción del socialismo», los problemas con que tiene que enfrentarse Chile y las causas que han motivado los cambios de los últimos meses.

Según Vuskovic, el liberalismo de la derecha, e incluso el reformismo, no promueve un desarrollo nacional independiente, sino «una concentración creciente del ingreso y la riqueza ahondando cada vez

Arturo López Muñoz

más las diferencias de nivel y formas de vida entre distintos sectores de la población chilena, empujando a una proporción creciente de esa población a la desocupación, al desempleo y a la marginalidad, y entregando cada vez más la economía del país a los intereses extranjeros. Por lo mismo, la prolongación del sistema supondría, inevitablemente, formas de Gobierno cada vez más dictatoriales y represivas». Como se señala en la introducción del programa de Unidad Popular, «lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo».

No obstante, sería erróneo pensar que este patrón de crecimiento había agotado sus últimas posibilidades. Su mantenimiento, eso sí, exigía la acentuación de las deformidades, concentración monopolista y extranjerización todavía mayor, e inevitablemente el aumento de la marginalidad y las diferenciaciones económicas y sociales.

La superación de los problemas chilenos, que se derivan de que «todo el funcionamiento del sistema económico está orientado a satisfacer las aspiraciones de consumo de un pequeño sector de la población, que controla el aparato económico y lo deforma en función de sus propios intereses y en desacuerdo con las necesidades básicas de la gran mayoría de la población», sólo podrá lograrse mediante modificaciones drásticas en la concentración de la propiedad y en la distribución del ingreso que «reorienten el esfuerzo productivo hacia las necesidades básicas de la población». Es decir, se pretende que el sistema económico deje de orientarse a satisfacer, fundamentalmente, las aspiraciones de una minoría reducida, poniéndose al servicio de las necesidades sociales de la mayor parte de la población.

Ahora bien, no se trata de un cambio fácil. Chile, «país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase, a los que jamás renunciarán voluntariamente» (programa de Unidad Popular), se ha de enfrentar con numerosos problemas y superar difíciles obstáculos ligados a una situación que ha predominado durante muchos años. Entre otros:

a) **La concentración del ingreso y de los medios de producción.**— «La población de ingresos más bajos percibe sólo 17 por 100 del ingreso total, lo que equivale a menos de un quinto de los que recibe la mitad de ingresos superiores. El 5 por 100 más rico de esta población se apropia del 27 por 100 del ingreso, lo que significa un ingreso por persona igual a casi 38 veces el ingreso por perso-

na del 10 por 100 de las familias más pobres; es más, el 1 por 100 más rico concentra el 10 por 100 del ingreso nacional, lo que significa una renta media igual a 69 veces la que tiene el 10 por 100 de ingresos más bajos» (Pedro Vuskovic, artículo citado).

Una consecuencia lógica de esta distribución del ingreso es que haya tenido lugar una concentración de la actividad económica, así como de la propiedad de los medios de producción: En 1966, doscientas ochenta y cuatro empresas controlaban prácticamente todos los sectores y subsectores de la actividad económica, y sólo 144 empresas controlaban todos y cada uno de las ramas de industria manufacturera. Además, la propiedad de estas empresas está muy concentrada en manos de pequeños grupos de accionistas. Así, consideradas las 271 mayores empresas —exceptuados Bancos y seguros— en 161 de ellas, los 10 mayores accionistas poseen entre el 90 y el 100 por 100 de las acciones. La concentración, como en otros países capitalistas, contribuye al incremento del grado de monopolio y facilita las vinculaciones entre empresas a través de consejeros comunes. De esta manera, una vez más, la competencia sólo es aparente. En realidad, únicamente 150 empresas controlan todo el mercado, y concentran, prácticamente, todas las ayudas estatales y los créditos bancarios.

b) **La inversión extranjera.**— También, como en otros países, «los grandes capitalistas naciona-

les se han mostrado incapaces de retener, por sí mismos, el control de la economía del país y de abrir líneas de producción. Han buscado, por tanto, la alianza y el apoyo de empresas y capitales extranjeros, que progresivamente han venido volviéndose los verdaderos dueños de una parte sustancial de nuestra economía y ejerciendo sin contrapeso un amplio dominio y control sobre las principales decisiones económicas» (P. Vuskovic, artículo citado).

Este proceso de extranjerización de la economía de Chile no es nuevo. Por una parte, ya en el siglo XIX, el imperialismo inglés llegó a controlar la producción de salitre, entonces el principal producto de la economía chilena. A raíz de la primera guerra mundial, los ingleses pasaron a un segundo plano. Las grandes empresas norteamericanas del cobre se constituyeron a partir de aquel momento en el principal grupo de poder del país. Desde entonces el proceso de penetración se fue agudizando, utilizando para ello diversos procedimientos (en 1968, en las 100 mayores empresas chilenas, 61 contaban con participación externa, y en 40 esta participación superaba el 30 por ciento del capital). En particular, «los contratos de licencias», tan abundantes en España, según se reconoce en un informe de la Corporación al Fomento (CORFO) sobre 22 empresas extranjeras, suponen, generalmente, la «obligación de comprar determinados productos intermedios donde establezca la empresa que otorga la licencia;

de usar determinados equipos impuestos por ésta; de contratar determinado personal asesor; prohibición de exportar; limitaciones sobre el volumen de ventas, etc.» (Pedro Vuskovic, artículo citado).

Por otra parte, el progresivo endeudamiento externo de Chile —el país más endeudado del mundo en relación al número de habitantes— muestra inequívocamente cómo los anteriores Gobiernos, al procurarse recursos a través de este procedimiento —recursos que eran incapaces de movilizar internamente—, estaban acentuando el grado de dependencia exterior (las remesas por amortizaciones e intereses para el período 1971-1976 ascendían ya a 1.400 millones de dólares y se calcula que para el período 1971-1972 supondrán el 50 por ciento del valor de las exportaciones).

Un programa económico ambicioso

En virtud de todo ello —según el programa de Unidad Popular— se había llegado a la conclusión de que «en Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y de sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundios cuyo poder permanece casi intacto».

Partiendo de estas premisas, es lógico que las soluciones y propuestas del programa de Unidad Popular, que se define esencialmente por su carácter global, fueran notablemente avanzadas, en especial si se considera que se planteaban dentro de una vía legalista de respeto a unas instituciones democráticas. En resumen, se ha de destacar lo siguiente:

A) Se considera necesario intensificar el área de dominio estatal mediante la NACIONALIZACIÓN de las riquezas básicas en poder de capitales extranjeros o monopolios nacionales. Según el programa de Unidad Popular, el sector de actividades nacionalizadas quedará integrado por los siguientes sectores:

1. La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral.
2. El sistema financiero del país, en especial la Banca Privada y seguros.
3. El comercio exterior.
4. Las grandes empresas y monopolios de distribución.
5. Los monopolios industriales estratégicos.
6. En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluso el gas licuado; la siderurgia, el cemento,

La victoria de Allende en las elecciones del 4 de septiembre pasado representó la derrota de la política norteamericana en el Continente y la confirmación de las tesis que afirmaban la posibilidad de un triunfo electoral de una izquierda radical.



CHILE

la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.

B) En el terreno de la Reforma Agraria, el programa propone su aceleración, intensificación, expropiando las fincas que excedan a la superficie máxima establecida e incorporando al cultivo las tierras abandonadas o mal explotadas.

En resumen, el programa económico de Unidad Popular propone «terminar con el capital monopolista nacional y extranjero y el latifundio», «resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías», «garantizar la ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar», «asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado», «diversificar las exportaciones» y «tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria» luchando contra la inflación mediante los cambios estructurales enunciados. Según el propio Allende, el programa de Unidad Popular «no es marxista, tampoco es socialista ni comunista. Es el programa que abrirá un camino al socialismo en Chile». Se pretende crear una «nueva sociedad», una «nueva economía», que hagan posible la posterior instalación del socialismo. «Chile —dijo Allende al tomar posesión de la Presidencia el 4 de noviembre— ha iniciado la marcha hacia el socialismo sin tener que pasar por las luchas fratricidas (...). Acabaremos con los monopolios nacionales e internacionales, con los banqueros explotadores, aceleraremos la Reforma Agraria y devolveremos a nuestro pueblo las riquezas nacionales que le pertenecen (...). La política económica chilena será dictada, desde ahora, por los propios trabajadores». Ahora bien, esta política económica antioligárquica y antiimperialista es más fácil de programar que de cumplir. Es evidente que la minoría explotadora no abandonará el poder sin combatir, y que no resultará fácil la realización de las metas propuestas. «Hemos ganado el Gobierno, pero no el poder (...). Tendremos que ser severos en nuestras responsabilidades, en el esfuerzo y en el sacrificio, porque la burguesía chilena, como grupo social, es pequeña, pero grande y poderosa en lo económico» (Aniceto Rodríguez, secretario general del Partido Socialista, 8 noviembre 1970).

El 17 de diciembre, el Presidente Allende afirmó que «existen actividades conspirativas» contra el Gobierno, aunque éste no se hallaba en peligro. «Sabemos que tenemos toda una muralla de intereses que van a ser lesionados y que tienen poder económico e influencia política, que controlan un alto porcentaje de las agencias informativas de la prensa y la radio» (Allende, declaraciones a «Marcha», 10 abril de 1970).

Pero, en cualquier caso, no puede pensarse que los problemas de Allende sólo le vienen por la derecha; las ocupaciones de tierras y viviendas han puesto de manifiesto

las contradicciones en que se debate un Gobierno que, estando formado por varias personalidades comunistas y socialistas, se ve obligado a respetar el derecho a la propiedad privada, garantizado en la Constitución.

Las ocupaciones de tierras y viviendas

Precisamente, uno de los problemas concretos de más difícil solución lo ha constituido las constantes ocupaciones ilegales de tierras y viviendas, frecuentes desde hace algún tiempo, y que dieron lugar, incluso, a violentos incidentes.

Los «sin casa», que iniciaron su campaña impulsados por Unión Popular, creando serios conflictos al Gobierno Frei, han continuado ocupando viviendas —ahora alentados por la Democracia Cristiana («Clarín», 22 noviembre 1970)— para seguir ejerciendo presión sobre el nuevo Gobierno con el fin de obligarle a entregárselas. Y, en efecto, éste ha dado a conocer un programa urgente de construcción de viviendas, pero su coste se eleva a 166 millones de dólares, lo que hace difícil su financiación a no ser que se desvíen recursos asignados a otros programas (Reforma Agraria, por ejemplo). También se han incrementado las ocupaciones de fincas bajo el impulso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que «ha participado activamente en las tomas de fondos a través del movimiento campesino revolucionario con el propósito de acelerar el proceso de Reforma Agraria (...). Esta estrategia se puso en práctica como una manera de agudizar las contradicciones en el seno de la Unidad Popular, donde hay sectores que quieren la Reforma Agraria y otros que no la quieren» (Juan Saavedra, dirigente del MIR, 29 diciembre 1970).

Hallándose el Gobierno de Allende en el deber de obligar a que se respete el derecho de propiedad por una serie de compromisos, es evidente que se encuentra ante una situación difícil, de la que intenta salir radicalizando la Reforma Agraria. En cualquier caso, hasta ahora, ni la autoridad —como afirma el ministro del Interior (30 diciembre)— ha sido «desbordada ni tampoco llegaremos a desbordarnos en la autoridad».

Las invitaciones a la prudencia

Considerando las circunstancias en que se ha producido la toma de poder, desde muy variados ángulos se ha invitado al nuevo Presidente a la «prudencia» en los cambios, ya que una rápida radicalización podría acentuar la fuga de capitales y provocar la huida de técnicos y dirigentes que sumirían a Chile en el caos. Allende ha tomado buena nota de estas indicaciones, como lo prueba su llamamiento a los trabajadores para no

«hacer el juego a la derecha» exigiendo demasiado; su misma moderación en las exposiciones, en las que la demagogia ha brillado por su ausencia, es buena prueba de ello. Pero si bien esto es cierto, no lo es menos que el programa enunciado por la Unidad Popular se está haciendo realidad a mayor velocidad que la esperada. El Gobierno Allende, que no quiere ser la izquierda del sistema y que pretende sustituir el régimen capitalista chileno por los cauces legales, es decir, por un procedimiento hasta ahora inédito, se encuentra ya ante el difícil dilema de toda revolución: «Una situación en la que avanzar es peligroso; detenerse, más peligroso aún, y retroceder, la muerte de la revolución» (Ernesto Guevara, «Seminario sobre planificación», Argel, 13 junio 1963). Pero hasta ahora es evidente que el nuevo Gobierno no se ha detenido: la revolución está en marcha.

Principales medidas adoptadas

Buena prueba de ello son las medidas adoptadas ya por el Gobierno Popular:

- El 4 de noviembre entraron en vigor las reformas constitucionales aprobadas durante el mandato Frei: derecho de sufragio desde los dieciocho años y voto a los analfabetos.

- El 11 de noviembre el Presidente Allende retiró las acciones penales por infracción a la ley de seguridad interior del Estado presentadas contra miembros del MIR, organización de extrema izquierda que durante el pasado año realizó varios asaltos a Bancos y supermercados con el fin de financiar sus actividades (esta organización cesó en estas acciones a raíz de la elección de Allende). También anunció la disolución del grupo móvil de carabineros, fuerza de policía especializada en la represión de manifestaciones callejeras.

- Otra de las primeras acciones importantes del Gobierno Allende fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, decisión «deplorada» por el Gobierno norteamericano. Posteriormente se autorizó el establecimiento en Santiago de Chile de una misión estatal de comercio de Corea del Norte, ampliándose los lazos con todos los países socialistas. En la Asamblea General de la ONU, Chile votó por vez primera a favor del ingreso de la China Popular en la Organización.

- En el orden interno, las medidas adoptadas han sido igualmente importantes: Rebajas impositivas para los sectores de ingresos medios y bajos; anuncio de una nueva política de remuneraciones salariales con aumentos del 100 por 100 a los sueldos y salarios bajos, y reducción de los grandes sueldos; entrega de medio litro de

leche diario a todos los niños del país; «orden a la policía de reemplazar los métodos represivos por métodos persuasivos; represión del tráfico de divisas; contención de las alzas de precios; plan de obras públicas para abordar la cesantía» (A. F. P., 4 diciembre 1970), expropiación de la gran empresa textil Bellavista, abandonada y paralizada por sus propietarios, así como de otras empresas norteamericanas como NIBSA, por haber sido paralizadas «por orden exterior»; estatización de la industria de acero de Huachipato, mediante la adquisición por el Estado de las acciones en poder de inversionistas privadas. También se ha logrado «un acuerdo fraternal» entre estudiantes comunistas y del MIR, porque «el enfrentamiento entre la izquierda sólo favorece al enemigo» (declaración del MIR, 4 diciembre 1970). Junto a estas medidas se ha anunciado el respeto al escalafón de las Fuerzas Armadas y carrera diplomática; respeto a la libertad de prensa y austeridad de gastos públicos, etc...

En relación a las cuestiones de mayor importancia, las medidas adoptadas son las siguientes:

Reforma Agraria

En cuanto a la Reforma Agraria, el Gobierno chileno, que se propiamente «profundizar» la iniciada por Frei, ha anunciado que tiene el «máximo interés» en finalizar en breve la expropiación de los latifundios (3.000 ó 4.000) existentes en el país. La Reforma Agraria terminará con el sistema del latifundio (serán afectadas las fincas que exceden de las 80 Ha. de regadío o sus equivalentes en cada zona) dentro del «respeto más absoluto por la persona humana». El proceso ha comenzado: el 29 de diciembre se confirmó la «toma de posesión» de 62 fincas agrícolas con un total de 44.000 Ha. El 31 de diciembre se expropió el mayor latifundio de Chile y uno de los mayores de Iberoamérica —el grupo de ocho estancias, perteneciente a la S. Explotadora de Tierra de Fuego en la provincia de Magallanes, dedicado, especialmente, a la ganadería y con una extensión de 730.000 Ha.— Por último, el valor de las fincas expropiadas se hará efectivo de la siguiente forma: el 10 por 100 al contado y el resto en veinticinco años.

Nacionalización de la Banca

Sin duda, una de las medidas que más impacto han tenido en Chile y fuera de Chile ha sido el anuncio hecho por el Presidente Allende (30 diciembre 1970) de la próxima estatización de los Bancos privados —medida que con algunas diferencias de matiz también proponía en su programa Radomiro Tomic, dirigente demócrata-cristiano—, con el fin de que «los instrumentos financieros que funcio-

nan en el país no constituyan patrimonio de una minoría, sino que reviertan en bien de la comunidad» (Allende, 30 diciembre 1970). Con esta estatización, que los funcionarios del nuevo Gobierno han diferenciado de la nacionalización, los Bancos seguirán funcionando según sus estatutos y tradiciones, aunque bajo el control estatal. La medida afectará a 19 Bancos chilenos (12 de ellos con sede en Santiago y siete regionales), mientras que los cinco Bancos extranjeros que actúan en Chile operarán bajo un estatuto especial (A. F. P., 30 diciembre 1970). Con estos últimos, el Gobierno tratará —dijo Allende— de llegar a un modus vivendi con ellos, «que permita salvaguardar los intereses del país».

El Estado adquirirá la propiedad de las acciones de los Bancos estatizados pagando los primeros 10.000 escudos de acciones en certificados de ahorro, inmediatamente liquidables, y el resto se hará efectivo en un plazo comprendido entre los dos y los quince años. Además de garantizar «las conquistas ya conseguidas» por los empleados bancarios, toda una serie de medidas —reducción de las tasas máximas de interés, establecimiento de tipos de interés inferiores para determinadas actividades, redistribución del crédito a sectores marginados hasta ahora, descentralización regional del mismo, etcétera— impedirán que los monopolios acaparen el crédito y que «los pocos privilegiados de siempre» sigan usufructuándolo.

En general, la estatización de la Banca no ha sorprendido, pues desde hace tiempo venía siendo objeto de lo que algunos círculos calificaban como «campaña de descrédito», si bien esta «campaña» no era otra cosa que la descripción pura y simple de su estructura y actividades. Aunque en Chile no ocurre lo que en otros países capitalistas en los que la Banca Privada constituye el verdadero centro de poder económico, los Bancos «responden directamente a los intereses de los grandes grupos» (Pedro Vuskovic, «Diagnóstico de una economía») y han favorecido —junto con las compañías de seguros— la concentración de los monopolios que, lógicamente, fueron los principales beneficiarios del crédito. (En 1967, por ejemplo, el 2,7 por ciento de los deudores disponía del 58 por 100 del volumen total de crédito, 37 deudores solamente dispusieron del 23 por 100 del crédito.)

Nacionalización de la industria del cobre y de la minería del carbón

Hasta ahora, y a pesar de que se había prometido que las empresas y capitales serían objeto de severos controles, e incluso de nacionalizaciones, las medidas sobre la inversión extranjera han sido más bien moderadas, si bien ya se haya

empezado a poner término a la dependencia exterior, en especial de Estados Unidos, cuyas inversiones se elevan a unos 1.000 millones de dólares, mediante el inicio del proceso de nacionalización del cobre. La nacionalización de esta actividad es fundamental para Chile, pues supone —de manera destacada— el principal capítulo de las exportaciones y, por tanto, de sus ingresos del exterior.

Ciertamente, el proceso de nacionalización ha sido facilitado por la política de «chilenización» (compra de la mayoría de las acciones) emprendida por el anterior Gobierno, pero la «escalada» actual no deja de tener una significativa trascendencia.

Otro acontecimiento importante, en este aspecto, ha sido el anuncio hecho por el Presidente Allende —31 de diciembre— de estatizar la Compañía de Carbón Lota-Schwager, que producía el 50 por 100 del carbón chileno. La Corporación de Fomento (CORFO), el INI chileno, se hace cargo de la Lota-Schwager, «una empresa agonizante, con incapacidad de capital, de trabajo, sin capacidad financiera de desarrollo, con una acumulación de deudas cada día mayor, con disminución de los niveles de producción y productividad», lo que significaba «incertidumbre y desesperanza» para las 15.000 familias de los mineros que trabajaban en ellas (Allende, 31 diciembre 1970).

Un camino difícil

Todo este conjunto de medidas, adoptadas según la línea programática de Unidad Popular, han producido ya una dinámica de cambios que, se estima, servirán de base a un desarrollo auténticamente nacional. Evidentemente, la experiencia chilena será seguida con intenso interés por todo el mundo. No se nos oculta que será difícil y estará plagada de peligros de toda índole —entre los que no se puede excluir el mismo atentado personal—, hasta tal punto que casi nadie se extrañaría de que la experiencia chilena «se quedara en el camino». En todo caso, como ha señalado el propio Presidente Allende, «el nuevo Gobierno se enfrenta con esta inmensa responsabilidad: o establece los caminos concretos para realizar estas auténticas aspiraciones proyectándose en el futuro, en libertad y con un sentido nacional, o condena al país a un nuevo confusiónismo ideológico con grave riesgo de la unidad nacional, y lesiona definitivamente las inmensas posibilidades de desarrollo del país». Las realizaciones y los resultados concretos nos dirán en su día si, como se pretende, se trata de una nueva vía capaz de iniciar el proceso de construcción del socialismo en Chile. Hasta ahora, los pasos que se han dado son ciertamente importantes; para grandes masas de la población la utopía comienza lentamente a convertirse en realidad. ■ A. L. M.



LA ESCASEZ DE PERSONAJES

WASHINGTON.—Los Estados Unidos están sufriendo su más aguda escasez de entrevistas por radio y televisión desde hace veinte años.

La razón de esto es que en tanto que tales programas se han venido multiplicando por miles, la gente que aparece en ellos se ha gastado. En 1960 había 250 personas interesantes disponibles para cada programa; diez años más tarde hay 250 programas tratando de entrevistar a la misma persona.

Las cosas se han puesto tan mal que un profesor que escribió un libro sobre los hábitos sexuales de las larvas de carcinoma fue recientemente secuestrado frente al programa "Hoy", en Nueva York, y llevado en avión a California, donde fue obligado a participar en un programa.

Dos famosas presentadoras de programas que se dan a altas horas de la noche tuvieron un desafío de tirarse del pelo en un salón de belleza, por un autor que acaba de publicar un libro sobre las cejas postizas.

Para evitar una guerra total entre los presentadores, se convocó una reunión secreta en la granja de Johnny Carson, en los montes Adirondacks, de Nueva York. Limosines negros, con las ventanas tapadas, estuvieron llegando con dos minutos de intervalo y de ellos salieron tan importantes dignatarios de la televisión como David Frost, Dick Cavett, Mike Douglas, Hugh Downs, Bárbara Walters, Virginia Graham, Irv Kup y David Susskind. Cada uno trajo al productor de su programa y al "coordinador de talento", para su propia protección, pero los empleados de Carson hicieron que todos dejaran en la puerta sus apuntadores eléctricos. Carson fue al grano inmediatamente, diciendo:

—Todos sabemos por qué estamos aquí. Hay una crisis en las entrevistas por televisión y, a menos que hallemos una solución, terminaremos haciendo todos anuncios para el café Maxwell House.

—Cierto —dijo Mike Douglas—, mi jefe en Filadelfia dice que a menos que se acuerde alguna manera de compartir las pocas figuras importantes que quedan por aparecer en nuestros programas, su programa terminará.

—¿Así están las cosas? —exclamó Virginia Graham—. Bueno, nosotros, los de la costa californiana, estamos ya cansados de que ustedes amenacen con traernos sus programas del Éste y apoderarse de todos nuestros personajes.

—Está bien, Ginny —dijo Merv Griffin—. Si ustedes invaden nuestro territorio, nosotros invadiremos el suyo.

David Frost dijo:

—No llegaremos a ninguna parte con recriminaciones. Según veo las cosas, no importa lo que hagamos, ya hemos utilizado a todos los que cantan, a todos los cómicos, autores y políticos que prometen en los próximos dos años. Para entonces se presentaría una nueva cosecha, pero no podemos esperar. Lo que sugiero es que cada uno se ofrezca como voluntario para cubrir la brecha, presentándose en los demás programas. Después de todo, nosotros somos más interesantes que los individuos a quienes entrevistamos.

—Estoy de acuerdo con David —manifestó Dick Cavett—, pero me parece que el público entraría en sospechas si comenzamos a aparecer cada uno en los otros programas sin una buena razón.

—¿Por qué no escribimos libros? Entonces tendríamos una razón legítima para aparecer en otro programa —sugirió Susskind.

Y Carson contestó:

—Usted sabe que no tenemos tiempo para escribir libros.

Frost dijo:

—Pero suponga que reunimos textos de nuestras entrevistas, ¿no constituirían un libro?

—Por supuesto —dijo Bárbara Walters—. Entonces no podrían criticarnos por aparecer en los otros programas.

Y así se decidió que cada presentador de televisión reunirá los textos de las mejores entrevistas que haya tenido en su programa; esto podría significar un total de 345 libros.

A medida que los limosines negros salieron de la granja de Carson, la policía estatal, que había recibido un informe anónimo sobre la reunión, apareció en el sitio. Pero, desafortunadamente, los participantes se habían ido ya...

(Copyright 1971, The Washington Post Co.—Distribuida por Editors Press Service Inc.—Agencia Zardoya.)